



siglo veintiuno editores argentina, s.a.
Guatemala 4824 (C1425BUP), Buenos Aires, Argentina

siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.
Cerro del Agua 248, Delegación Coyoacán (04310), D.F., México

siglo veintiuno de españa editores, s.a.
Sector Foresta n° 1, Tres Cantos (28760), Madrid, España

FAHCE - BIBHUMA

N° Inv: 64849.....

Sig. Top: 982.08 NOV 2.....

Fecha de alta: 11.8.11.....

Marcos Novaro
Historia de la Argentina. 1955-2010. - 1a ed. - Buenos Aires : Siglo Veintiuno Editores, 2010.
320 p. ; 23x16 cm. - (Biblioteca Básica de Historia / dirigida por Luis Alberto Romero)

ISBN 978-987-629-144-6

1. Historia Argentina. I. Título

CDD 982

Edición al cuidado de Yamila Sevilla y Teresa Arijón

© 2010, Siglo Veintiuno Editores S.A.

Diseño de colección: tholón kunst

Diseño de cubierta: Peter Tjebbes

ISBN 978-987-629-144-6

Impreso en Grafinox // Lamadrid 1576, Villa Ballester,
en el mes de noviembre de 2010

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina // Made in Argentina

Índice

- Introducción** 9
- 1. La Revolución Libertadora: el fracaso de la restauración conservadora** *procesos centrales* 13
- ¿Integrar o erradicar al peronismo? ¿Restablecer el orden social o la libertad política? Dos rasgos persistentes: igualdad social y crisis de legitimidad política. Lo que sí cambió con la Libertadora: crisis del estado y polarización de clases. La acción de la Resistencia y la reorganización del sindicalismo. Las tácticas de Perón y el fracaso de la Constituyente. La causa decisiva del fracaso: la división del radicalismo
- 2. Frondizi, entre la proscripción y la integración** *experiencia desarrollista* 39
- El entusiasmo desarrollista y los "factores de poder". Logros económicos y asedio político. Los complejos efectos sociales de la modernización: "los ejecutivos" y "las villas". La caída de Frondizi y el gobierno de José María Guido
- 3. Arturo Illia: un gobierno moderado en la escena de la revolución** 65
- Una tregua demasiado frágil. Illia en funciones: una nueva versión de políticas conocidas. La lucha de ideas y el nuevo rol de la juventud. La derrota de Vandor y el golpe
- 4. La Revolución Argentina: de la suma del poder a la impotencia** 89
- Onganía y el tiempo económico. Levingston y el tiempo social: inflación y violencia. Lanusse y el tiempo político: un intento tardío de contener la revuelta

3. Arturo Illia: un gobierno moderado en la escena de la revolución

Electo en 1963 por la UCRP con un muy bajo porcentaje electoral, Illia apostó a mantener divididos a los peronistas y los militares, viendo en ello el único camino para la supervivencia de una frágil institucionalidad democrática. La fórmula ya utilizada por Frondizi, consistente en aplicar o levantar –según la conveniencia circunstancial del gobierno– la proscripción que desde 1955 pesaba sobre los candidatos que se identificaran con Perón, ahora fue usada por Illia contra el que consideró su principal enemigo: el neoperonismo controlado por Vandor. Este choque entre Illia y Vandor se agravaría por el intento del primero de reformar el modelo sindical heredado, y por la presión que ejerció Perón para debilitar a los neoperonistas, aun al precio de dividir la CGT y dar alas a la izquierda del movimiento. El gobierno de la UCRP, pese a los buenos resultados económicos que logró, hallaría escaso eco para sus planteos en una opinión pública que, desde mediados de la década de los sesenta, se identificó cada vez más con alguna de las posiciones polares que otros actores políticos le proponían: la de una revolución social, a la que ahora parecía apostar el propio Perón, y la de una revolución nacional encabezada por las Fuerzas Armadas. Éstas, por lo pronto, se impondrían, gracias a que sumaron al control de los medios armados la idea muy difundida de que eran las únicas capaces de imponer orden y acelerar el desarrollo.

Una tregua demasiado frágil

La llegada de Illia a la presidencia no fue acompañada por nada parecido a la ola de expectativas que Frondizi había sabido concitar. Debido ante todo, aunque no solamente, a su insuficiente legiti-

mación electoral, apenas pudo engalanar su toma de posesión con las insignias de una modesta ansia de tranquilidad y el deseo de que se prolongara la tregua posterior a las confrontaciones que habían cerrado el breve ciclo desarrollista. Para concretar esa aspiración, el nuevo mandatario eventualmente contó con el concurso de los actores predominantes en sus respectivos campos: los azules del Ejército y los participacionistas de los gremios. Sin embargo, ninguno de los dos figuraba en la lista de aliados a los que Illia deseaba acercarse para adquirir bases más sólidas y una efectiva capacidad de gobierno. Y he allí la raíz de algunos de los muchos obstáculos que habría de enfrentar.

Illia y la UCRP no ocultaban su inclinación por los colorados, afirmada tanto en razones históricas –la común preferencia por una política antiperonista lo más dura y sostenida posible– como en motivos más inmediatos –la debilidad de esa facción militar la volvía atractiva para un gobierno también débil, cuyo futuro dependía de que ningún actor se destacara demasiado–. Por eso, si bien mantuvo al frente del Ejército al jefe azul, el general Onganía, Illia desafió su autoridad promoviendo a puestos de mando a sus adversarios internos. Algo semejante intentaría en el campo gremial. Los combativos habían ganado terreno gracias al fracaso de la integración y al apoyo que ahora recibían de Perón, cada vez más receloso de las ambiciones de Vandor. Pero era éste quien controlaba las principales organizaciones y encarnaba el núcleo duro del modelo sindical que Frondizi había relegitimado y que, a los ojos de la UCRP, constituía el verdadero obstáculo para resolver la “cuestión peronista” y dar estabilidad al sistema democrático. De allí que Illia apuntara a horadar las bases institucionales del poder de la “burocracia sindical” a través de la democratización de la vida interna de los gremios, la autorización de más de una organización por rama de actividad y la representación de las minorías en las conducciones. Éstos eran objetivos que también compartían la izquierda y el peronismo combativo, y que, como era de prever, despertaron la ira del grueso de los dirigentes, no sólo de los vandoristas, alentándolos a olvidar sus diferencias frente a un enemigo común.

El hecho de que Illia se esmerara en preservar o restablecer equilibrios entre los varios Goliats con los que debía lidiar se ajustaba a su precaria legitimidad, pero no era suficiente para torcer su destino. Porque para afirmarse y afirmar la democracia no sólo debía combatir las “formas autoritarias y corporativas del pasado” sino también otras apuestas, más amenazantes por ser mucho más innovadoras: las que prometían terminar con los problemas nacionales a través del ejercicio

revolucionario del poder y la violencia. Al no advertirlo, estimuló a los militares liderados por Onganía a abandonar el ambiguo legalismo que habían abrazado cuando aceptaron el llamado a elecciones en 1963 –como revelaba el “comunicado 150”, movidos por los fracasos en que habían desembocado sus intervenciones previas y por la secuela de indisciplina interna que habían causado en el Ejército–. Y peor todavía, desaprovechó las posibilidades de cooperar con el sindicalismo interesado en traducir a la política electoral su poder sectorial.

Tras las elecciones de 1963 Vandor relanzó esta iniciativa, contando a su favor con la pérdida de convocatoria del voto en blanco y la nada despreciable representación institucional lograda por los neoperonistas: 17 diputados, siete senadores y tres gobernaciones (Chaco, Neuquén y Salta).

Primera Plana

Revista orientada entre otros por Mariano Grondona, hizo una crítica inclemente de Illia antes de que asumiera la presidencia: según su línea editorial, era un “político ineficiente”, “incapaz de impulsar el desarrollo”.



Portada de *Primera Plana*, año 4, núm. 164, 28 de diciembre de 1965. El texto que acompaña la caricatura hecha por Flax (Lino Palacio) plantea la pregunta: “¿Y si les digo que tampoco sé cómo se corta un pan dulce?”.

En julio del año siguiente logró imponerse en las internas que oficializaron la conducción del Partido Justicialista, finalmente aceptado por el Poder Judicial. Pero ni a Illia ni a otros actores partidarios les resultaba atractiva o siquiera tolerable esta versión laborista del peronismo: inseguros de sus bases electorales, no vieron con buenos ojos tener que repartir entre más candidatos los votos disponibles y sospecharon, con razón o sin ella, que dado que debían lidiar con poderes corporativos desafiantes, como el militar y el sindical, si permitían que uno de ellos hiciera pie en la arena electoral, ya no podrían mantenerlo a raya. Retrospectivamente, podría extraerse la conclusión opuesta: de la formación de un peronismo laborista, interesado en la convocatoria regular a elecciones, dependía la supervivencia del sistema vigente frente al intervencionismo militar. Desde esta perspectiva, puesto que Illia y su gobierno se empeñaron en cortar las alas a ese peronismo, cabría concluir que así clausuraron la única posibilidad que tenía la democracia, en cualquier caso bastante acotada.

Illia, un hombre que hacía gala de una honestidad personal a toda prueba y de una fidelidad hacia los compromisos asumidos muy poco común en la política argentina —y que se esforzaba por mostrarse en cuanto a eso, y en todo lo demás, como un álter ego de Frondizi, con la esperanza de no terminar igual que él—, descubriría demasiado tarde que esas virtudes también podían traerle problemas. Su terca determinación de defender las promesas realizadas durante la campaña electoral (pese a que no habían sido validadas en las urnas y a que el curso de los acontecimientos no demostraba su pertinencia) abonaría su imagen como exponente de la “vieja política”, mal dotada para enfrentar los cambiantes tiempos que corrían, ante una opinión pública y grupos organizados ya por otros motivos, dispuestos a desconfiar de él y a considerarlo incapaz, tibio y, sobre todo, lento.

Illia en funciones: una nueva versión de políticas conocidas

En líneas generales, el gobierno de la UCRP continuó la política económica y social aplicada por las gestiones anteriores, aunque introduciendo algunas variantes: se puso el acento en el nacionalismo económico, y además en la industrialización, en la distribución del ingreso y la garantía de los derechos sociales, valores con los que se habían identificado ya tanto los peronistas como los desarrollistas. Los radicales del pueblo, ansiosos por mostrarse capaces de defenderlos de un modo más conse-

cuente y eficaz, derogaron los contratos petroleros de Frondizi y enviaron al Congreso un proyecto de ley que establecía el salario mínimo, vital y móvil, para aumentar los ingresos de los trabajadores menos calificados y de regiones atrasadas, en general no cubiertos por las paritarias. Se dispuso además el control de precios de los alimentos de consumo masivo y de los medicamentos, junto con otras medidas destinadas a mejorar la atención sanitaria pública y gratuita. En conjunto, la política económica buscó fortalecer el modelo de pleno empleo, intervencionismo social, mercados protegidos e industrialización por sustitución de importaciones, modelo que ni siquiera la Libertadora había abandonado.

El resultado fue, en principio, positivo: la economía se reactivó aprovechando las inversiones acumuladas durante el gobierno de Frondizi y dejó atrás la recesión desatada en 1962 (fruto, una vez más, de la falta de divisas para solventar las importaciones). Pero eso no bastó para resolver dificultades estructurales que subyacían al crónico desequilibrio del comercio exterior y la falta de financiamiento para las inversiones. Las medidas nacionalistas incluso retrajeron las inversiones externas en el sector petrolero, por lo que agravaron esos problemas. Para peor, las políticas distributivas que pretendían seducir a los trabajadores chocaron con la animosidad del sindicalismo, que las consideró insuficientes. Movida principalmente por el rechazo al proyecto de reforma de sus organizaciones, a la fiscalización de sus elecciones y al manejo de los fondos sindicales por parte del Ministerio de Trabajo, la CGT lanzó un plan de lucha entre mayo y junio de 1964. El Ejecutivo no quiso reprimir y se limitó a solicitar a la Justicia que frenara las tomas de fábricas, medida que no resultó eficaz.



Plan de lucha de los gremios

Como señala Daniel James, durante el plan de lucha fueron ocupadas cientos de plantas industriales y se bloqueó la producción de muchas otras, lo que expuso la debilidad de Illia. Era tan evidente que el plan tenía al gobierno por destinatario que muchos empresarios colaboraron con las ocupaciones para evitar actos de sabotaje y mantener la buena relación con los gremios.

Además de poner coto a los proyectos de reforma del modelo sindical, Vandor apuntó a los militares y al propio Perón: quería convencerlos de que debían aceptar su poder de veto cuando diseñaran sus estrategias para el futuro. ▀

Los sectores medios tampoco resultaron presa fácil para la seducción oficial. Muchos se dejaron tentar por las diatribas que los desarrollistas, la prensa empresarial y de derecha, y los cada vez más desafiantes voceros militares lanzaban contra el Ejecutivo. Aun cuando la economía creció a buen ritmo en 1964 y 1965 y los profesionales, pequeños empresarios y comerciantes se contaban entre los más beneficiados, muchos tendieron a creer que era posible y necesario hacer más: convencidos de que el país requería un orden público más riguroso y un control más férreo de la inflación y del activismo gremial, adhirieron al modelo que prometía “desarrollo y seguridad”, que Brasil estaba instrumentando gracias al régimen militar instaurado allí en 1964.

El movimiento estudiantil y los universitarios en general hallaron sus propios motivos para no simpatizar con Illia. Si bien éste dio continuidad a los incrementos presupuestarios, el cogobierno y la autonomía, y fortaleció los planes de investigación en ciencia y técnica, sus logros quedaron deslucidos debido a la creciente adhesión de los universitarios a las ideas revolucionarias, principal aunque no exclusivamente de izquierda. Y también debido a sus constantes demandas de mayores recursos, que el gobierno ya no pudo atender. Los desencuentros se agravaron a raíz de la invasión estadounidense a Santo Domingo cuando Illia estaba estrechando lazos militares con los Estados Unidos (había vuelto a comprarles equipamiento y a participar de sus programas de entrenamiento). La reivindicación gubernamental de la “autodeterminación de los pueblos” fue considerada tibia e inconsistente por las organizaciones de estudiantes y de izquierda. Por si esto fuera poco, su crítica a Washington bastó para que los militares, deseosos de participar de la cruzada anticomunista y de ganar puntos en la estima de sus pares norteamericanos, juzgaran que coqueteaba con un regionalismo izquierdista sumamente peligroso para la seguridad nacional. Un terreno en el que sí se pudo avanzar fue Malvinas: abandonando la actitud quietista de sus predecesores, en 1965 el gobierno de Illia logró que el litigio se aceptara como un caso de descolonización (aunque uno particular, pues el reclamo no lo hacía la “población nativa” del territorio en disputa) en las Naciones Unidas. Desde entonces, ése sería el argumento más sólido para forzar al Foreign Office a sentarse a negociar.

Es comprensible que, en este clima de críticas cruzadas y debilidad política, Illia no pudiera poner coto al poder de Onganía en el Ejército. El caudillo azul había incrementado su prestigio sobre el conjunto de los uniformados al restablecer la disciplina interna y dejar atrás los choques de 1962 y 1963, gracias a sus indiscutibles dotes de jefe y al im-

pulso dado a la lucha contra el comunismo como misión esencial de las Fuerzas Armadas. Misión que la oficialidad abrazó con fervor debido a sus diferencias en los demás terrenos y a los peligros que representaba a sus ojos un movimiento popular que coqueteaba cada vez más con la izquierda. Fue por eso que las tendencias que experimentaron en esos años todos los ejércitos de la región –intensificación de las actividades de inteligencia, asistencia a academias militares en Estados Unidos y adhesión a la doctrina de seguridad nacional, de acuerdo con la cual primaban los “enemigos internos” en sus hipótesis de conflicto– tuvieron especial intensidad en nuestro país.

La proliferación de los focos guerrilleros pareció justificar esta peculiaridad: los jóvenes universitarios que se involucraron en un nuevo intento de crear una guerrilla rural en Taco Ralo, al norte de Córdoba, le hicieron un flaco favor a Illia al ofrecer la evidencia empírica que la doctrina de la seguridad nacional estaba necesitando. Aunque el grupo fue rápidamente desarticulado por la policía, su ejemplo hizo escuela en círculos de la izquierda marxista y peronista: en 1964 surgieron de esta última el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Ambos se desmembraron a mediados de 1966, tras realizar unas pocas acciones. Pero otras agrupaciones similares aparecerían enseguida. En este clima, los intentos de Illia de favorecer a los colorados fueron percibidos en los cuarteles como atentados contra la salud de las instituciones armadas y alentaron el rechazo de la oficialidad a la democracia de partidos, vista como fuente de divisiones y conflictos. De allí que, cuando Onganía pasó a retiro a mediados de 1965, quedaran al frente de la fuerza oficiales que eran sólo leales a él.

Otro terreno donde el gobierno de Illia se reveló mal preparado para adaptarse a los tiempos que corrían fue el de las comunicaciones, que vivieron cambios acelerados en esta etapa. Los programas televisivos de actualidad se multiplicaron y cobraron gran influencia. Surgieron sofisticadas revistas de análisis sobre la situación del país y el mundo, como *Primera Plana*, *Panorama* y *Confirmado* desde la derecha, *Chey Usted* desde la izquierda, que replicaban localmente los modelos que estaban revolucionando el género en los países centrales. Considerando que prestarse a la exposición periodística era indigno de su investidura, Illia adoptó ante esta prensa y sus críticas una actitud retraída, que lo mostró débil y carente de argumentos. El presidente radical se justificó señalando que “los hechos hablan por sí solos”. Recordemos que Perón había dicho algo por el estilo –“mejor que decir es hacer”–, pero se había cuidado de no ser fiel a ese lema.

El campo en el que finalmente se reveló la limitación más seria de la estrategia oficial fue la relación con el peronismo en sus dos versiones, electoral y sindical, ahora estrechamente conectadas entre sí. Atento al problema de legitimidad que enfrentaba, Illia anunció que se eliminarían progresivamente las proscripciones. Suponía que si administraba esa progresividad con prudencia, podría mantener divididos a sus adversarios y formar una mayoría que lo apoyara. La perspectiva de una mayoría antiperonista estaba facilitada por el declive de la UCRI, que muchos consideraban irreversible. Y podría asegurarse haciendo alianzas con otras fuerzas y líderes por el momento dispersos.

Como Frondizi años antes, para ello Illia debía presentarse a la vez ante la izquierda y la derecha como la única opción capaz de evitar que los peronistas volvieran al poder. Pero sucedió que esa pretensión era ahora aún menos convincente que entonces para los votantes y dirigentes de ambos sectores del espectro político. Ejemplo de ello brindó Oscar Alende, gobernador bonaerense por la UCRI cada vez más alejado de Frondizi, quien buscó atraer los votos peronistas mostrándose atento a los reclamos sindicales, indignado por la tibieza de Illia ante los “poderes imperiales” y deseoso de reemplazarlo para que se pudiera “destrabar el desarrollo nacional”. Entre los conservadores, dirigentes ya probados en su antiperonismo como Aramburu y Alsogaray usaron esas credenciales para refutar los intentos oficiales de presentarse como única opción contra el “caos peronista”. Y, por otro lado, tampoco la UCRP buscó seriamente un acuerdo: sus líderes continuaron fieles a la regla de oro de considerar que toda alianza era contradictoria con la definición del radicalismo como único y auténtico representante de la voluntad del pueblo. Y se esmeraron en hacerla realidad.

La única opción que le quedaba al gobierno de Illia era mantener dividido el caudal justicialista y rogar que le alcanzara el tiempo para probarle a un número suficiente de votantes de las demás extracciones que su opción moderada era la más adecuada para salir adelante. De allí que, al acercarse las elecciones parlamentarias de 1965, insistiera en ofrecer la zanahoria de la competencia electoral a los neoperonistas mientras agitaba el garrote de la limitación del poder sindical y la exclusión innegociable de Perón. La cuestión gremial se afrontó con un decidido ataque al “modelo heredado”. Ante esto, la CGT anunció para 1965 una nueva edición de sus planes de lucha, que provocaría un gran perjuicio al gobierno al partir aguas entre los amplios sectores medios movilizados y radicalizados (universitarios, juventud y organizaciones católicas de base, e incluso pequeños

empresarios), y todos aquellos que privilegiaban la conservación del orden, que eran mayoría en las jerarquías de la iglesia, las Fuerzas Armadas y la gran empresa, pero también poblaban las clases medias. Illia apareció aislado y asediado, incapaz de representar los intereses de ninguno de los dos bandos.

También los peronistas se dividieron, en su afán por controlar y orientar el movimiento de protesta, debido a la puja sorda entre Perón y Vandor. Y un duelo ya abierto se disparó a raíz del “Operativo Retorno”: Perón intentó volver al país en diciembre de 1964, para recuperar contacto con sus bases y acorralar a los militares y a Illia; pero el resultado fue ambiguo, porque Vandor y Las 62 incumplieron su promesa de movilizarse para forzar su ingreso al país y el líder quedó en *off side* cuando su avión fue detenido en Brasil. El gobierno de Illia se vio obligado a mostrar el peor rostro de la proscripción faltando a su compromiso de levantarla; pero Perón no pudo evitar que quedara en evidencia que el sistema político necesitaba su ausencia para mantenerse en pie y que tenía los medios para asegurarla. Desde entonces ya no dudaría en alentar la revuelta, tanto contra el gobierno como contra “los traidores”. Sus arengas lograrían dividir a la CGT y, en enero de 1966, incluso a Las 62: Framini y otras figuras como Olmos y Alonso se alejaron del vandorismo y crearon las “62 organizaciones de pie junto a Perón”. La fractura se replicó en marzo en la bancada de Diputados y posteriormente en las listas que competirían por el voto peronista en las provincias. Con todo, como veremos, el gobierno estaba lejos de poder aprovechar estas divisiones.

La lucha de ideas y el nuevo rol de la juventud

Durante la segunda mitad de los años sesenta, en un vivo reflejo de lo que ocurría en el mundo desarrollado, la Argentina vivió una verdadera revolución de las costumbres, las creencias y las expectativas. El bienestar económico acumulado desde la segunda posguerra; la crisis de las tradiciones y las ideas conservadoras que habían predominado en la familia, en la educación y en general en la vida social durante los años cincuenta; y la revolución tecnológica en las comunicaciones y el transporte —que, con la difusión de los vuelos a reacción, las computadoras y la exploración espacial parecían indicar la aceleración sin límite del progreso— dieron un color peculiar a esos años. Una de las características de esta época fue que la juventud pasó a ser un actor

decisivo y autónomo, público predilecto de los nuevos bienes y servicios y también de los discursos, y pronto, por extensión, de la política: el mundo que parecía estar tomando forma era uno en el que los jóvenes, por su distancia respecto de las tradiciones y su disposición a impulsar y adaptarse a los cambios, serían protagonistas estelares.

El impacto local de todo ello fue particularmente intenso por varios motivos. El más decisivo fue, tal vez, la acumulación de frustraciones con los sucesivos proyectos reformistas, frustraciones que habían fomentado una visión negativa de las generaciones ya maduras que las habían protagonizado. Este punto de vista sería propagado con especial entusiasmo por intelectuales coetáneos de quienes aparecían como mercedores de la furia de los más jóvenes, y que de este modo canalizaban su propia frustración por el resultado de proyectos que en su momento los habían seducido. Su avanzada edad, como en el caso del ya consagrado Arturo Jauretche pero también en el de otros como Juan J. Hernández Arregui —que recién en estos años alcanzó popularidad—, no les impidió convertirse en ideólogos de una visión “juvenil” de la historia y de la política nacionales; visión que se hacía eco de los vientos llegados desde el exterior para proponer una “etapa revolucionaria” que finalmente permitiría cumplir el destino que hasta entonces se había mostrado esquivo. Para ello se inspiraron en las ideas regenerativas y refundacionales que habían animado en sus orígenes tanto al radicalismo como al peronismo, cuyas promesas recogieron y radicalizaron.

Además, y contradictoriamente, el quiebre entre generaciones se magnificó debido a que, pese a esa visión tan negativa sobre los “viejos políticos” (visión de la que sólo se salvaba Perón —aunque no del todo—, y no sólo por su posición privilegiada en el corazón del pueblo sino también por su situación de exiliado y perseguido político), el país se había modernizado a gran velocidad en los diez años transcurridos desde 1955. Y esta modernización había impactado especialmente sobre los sectores medios educados por varias razones: el fácil acceso a la universidad y a las corrientes de pensamiento renovadoras por entonces en boga en el mundo occidental (el psicoanálisis, el existencialismo, el marxismo); la liberación de la mujer y su rápida integración a la vida cultural y económica; y la difusión del rock, el *hippismo* y otras formas de “espiritualización” de la vida y rechazo a la “integración al sistema”, ya fuera en la forma de vestir, las críticas al trabajo y la familia, o el desinterés por los bienes materiales.

Las familias en tensión



La Familia Falcón, 1963. Comedia de gran éxito creada por Hugo Moser y emitida por Canal 13. Archivo *Clarín*.

Hasta mediados de los sesenta la institución familiar se había mantenido a resguardo de los cambios sociales y la modernización, reproduciendo en su seno las pautas patriarcales tradicionales. Así lo revelan modelos mediáticos como los de *La familia Falcón* (1962) y *Los Pérez García* (1940-1966), que reflejaban el “mito de la intimidad protegida”: la vida familiar como refugio seguro y fuente de sosiego frente a un espacio público crispado, en transformación constante, violento y competitivo. Un padre proveedor y guía moral de la familia, una madre que cuidaba a los suyos desde su rol de esposa fiel y reina del hogar, y unos hijos subordinados a la experiencia de sus mayores eran los prototipos de la “familia decente”. Al avanzar la década, ese modelo tuvo que enfrentar crecientes desafíos: una vez que aceptaban cuestionar las pautas de autoridad heredadas, los padres no sabían muy bien cómo encarar la educación de sus hijos; de allí la rápida difusión del psicoanálisis en las revistas dedicadas a la familia (cabe destacar el éxito de *Escuela para Padres*, que Eva Giberti publicaba desde 1956, así como la modernización de publicaciones como *Claudia*, seguida poco después, aunque con una línea más conservadora, por el semanario *Gente*). La incomunicación y los recelos entre generaciones serían recogidos en notables producciones literarias y

cinematográficas; una de las más destacadas fue *Diario de la guerra del cerdo*, una novela de Adolfo Bioy Casares, de 1969, que se convirtió en largometraje en 1975, dirigido por Leopoldo Torre Nilsson. ■

Si bien los cambios reseñados expresaban fenómenos distintos, para muchos parecían tener una misma raíz y converger en la misma meta: un cambio epocal que afectaría los cimientos de la convivencia social, abarcando desde la experiencia de la sexualidad y los lazos de solidaridad, familia, educación y trabajo, hasta el sistema político. El cuestionamiento plebeyo de las jerarquías, al que ya nos referimos en el capítulo I, se estaba extendiendo de las relaciones entre clases a toda relación de poder, desde el plano de lo “micro” hasta el plano global (lo que Guillermo O’Donnell, en *El Estado burocrático autoritario*, describió como el origen de una “crisis de dominación social”). Todo ello despertó la expectativa de, y el temor a, una revolución integral inminente.

Las señales de cambio en el terreno político también eran muy diversas y, vistas retrospectivamente, claramente contradictorias en muchos aspectos. Pero en el clima entonces reinante podían parecer fácilmente traducibles a unos pocos y convergentes signos de “época” —la revolución cubana, el movimiento de descolonización del Tercer Mundo, el surgimiento de experimentos guerrilleros en todos los continentes y la diversidad de las experiencias socialistas en el este europeo y en Asia— que indicaban con claridad la descomposición del sistema político y económico y el nacimiento de un mundo nuevo. Uno en el que los ideales de justicia finalmente se harían realidad.

Cabe señalar además que, si estas expectativas hallaron un suelo especialmente fértil en la Argentina, fue gracias a la convergencia entre un rasgo social y otro propiamente político de la situación que se vivía. El “giro a la izquierda” de las clases medias tras la desilusión con Frondizi, marcado en las elites ilustradas, que se sintieron ignoradas por la política de partidos (naturalmente, ellas no veían atractivo alguno en un personaje provinciano y desde todo punto de vista antiguo como Illia), convergió con el giro en esa misma dirección de parte del peronismo político y sobre todo del sindical. La diferencia entre esta coincidencia y otra casi opuesta en el vecino Brasil es notable y explica la divisoria de aguas sociopolítica que se produjo durante estos años entre ambos países. No sólo el desarrollismo del gobierno de Juscelino Kubitschek había sido mucho más satisfactorio para las clases medias brasileñas que el programa de Frondizi para sus pares argentinas; también lo era el impulsado por los militares brasileños desde 1964: éstos habían escogido

como aliados a los profesionales y universitarios, sectores que respondieron integrándose con entusiasmo a los esfuerzos modernizadores y desoyendo los cantos de sirena de la revolución social. En Argentina, donde la posición social y política de esos sectores había sido tradicionalmente más sólida y gravitante, la situación parecía mucho menos favorable para ellos, y eso provocó una ola de resentimiento y radicalización. Además, hallaron al alcance de la mano canales para expresar esos sentimientos: sus demandas sectoriales y su visión de los problemas coincidieron por primera vez en décadas, y de modo muy espontáneo (lo que muchos considerarían como una prueba de su “necesidad histórica”), con las de un activo y cohesionado mundo obrero.

¿En qué consistió concretamente el ideario revolucionario que ganaba los ánimos de la sociedad, y en particular de las nuevas generaciones? Aludimos ya a la centralidad que la noción de justicia tuvo en él. Pero su peculiaridad fue, más que esto, la función política atribuida a las convicciones: los “ideales” cobraron una gran relevancia, no tanto porque hubiera un consenso sobre los valores y las metas a perseguir como por la coincidencia en que las ideas eran el motor primordial de la acción. Más que un acuerdo sobre una visión del mundo, había rechazo a las “ideas tradicionales” (entre las que a veces se incluía a algunas que no eran nada viejas, como las desarrollistas) y fe en la capacidad de otras, “nuevas”, para cambiar el país. Antes incluso de que se optara por las vías violentas (un efecto, antes que una causa, de este proceso), la ética y la estética de la revolución ya habían hecho el trabajo necesario para que el “pasaje de la idea al acto” permitiera identificar al nuevo protagonista de la política, llamado a ser el artífice del futuro: el “militante”. Bajo su romántica advocación, las ideas se politizaron y la política se ideologizó: pasó a considerarse una actividad creativa e imaginativa que desafiaba los límites de lo posible.

“Militante” era aquel que llevaba a la práctica sus convicciones y estaba dispuesto a sacrificarlo todo para alcanzar fines nobles y supremos. Su contracara era el político burgués, que con su falseada instrumentación de la “democracia formal” en los años anteriores había dado sobradas muestras de su incapacidad para ser fiel siquiera a sus propias reglas, de tender a la transacción, al acomodamiento oportunista entre creencias contradictorias, y a someterse a las “condiciones reinantes”. La “ética de la autenticidad” pudo así abarcar distintas posiciones en tensión —de izquierda, cristianas, populistas o nacionalistas— que no obstante se confundirían en el caldero de la militancia que ofrecían las universidades y las organizaciones juveniles de todo tipo. No fue

casual que, dentro de la izquierda, se impusieran en este clima los grupos inclinados a otorgar a "la acción" un papel decisivo en los procesos de cambio sobre "los determinantes estructurales": de allí el auge de los guevaristas, los maoístas y los trotskistas, a costa de comunistas y socialistas. Tampoco fue casual la convergencia de esa militancia en una actitud reactiva frente a las instituciones de la democracia liberal, en una escala que iba del desprecio al franco rechazo.

Esta actitud desentonaba fuertemente con lo que había sucedido una década atrás, cuando una renacida fe republicana y liberal propició el final del régimen peronista. Visto desde la perspectiva que brindaba una década de proscripción, ese efímero reverdecer sólo podía explicarse como una anomalía extemporánea o, peor aún, como un crédito injustificadamente otorgado a una "superestructura formal", la de la Constitución, cuya función había sido instrumentar la dominación social y política. De allí las analogías ahora en boga entre el falseamiento de la voluntad popular en la "década infame" y las no menos irritantes restricciones impuestas desde septiembre de 1955. El divorcio entre forma democrática y expropiación de los derechos de las mayorías en ambos períodos fomentó por tanto un *revival* de los "temas" dominantes en el debate ideológico de los años treinta —nacionalismo y antiimperialismo—, y a su vez se alimentó de él.

En rigor de verdad, las ideas nacionalistas venían ejerciendo una fuerte influencia en la vida pública ya desde comienzos del siglo XX. Pero fueron la crisis del modelo agroexportador y el fraude electoral los que permitieron que, desde 1930, se debilitara la confianza en los dos pilares del liberalismo —el libre comercio internacional y la democracia pluralista— y que el nacionalismo adquiriera prestigio primero entre las fuerzas de derecha y poco después entre las de izquierda, que abrazaron su denuncia del imperialismo, su reivindicación de los caudillos federales y sus expresiones de resistencia a la "internacionalización" y "liberalización" del país, dos fenómenos a los que ahora se achacaban todos los problemas. Ni el peronismo ni el desarrollismo carecieron de inspiraciones de este tenor, pero ambos terminaron por enfrentarse con los intelectuales nacionalistas. Y si algo caracterizó sus políticas fue la apuesta por reinsertar al país en el mundo asociándolo a las tendencias externas que, según creían, le permitirían retomar la senda del progreso. Los nacionalismos de los años sesenta, fueran de izquierda o de derecha e independientemente de su mayoritaria inscripción en el campo peronista, desconfiaban en cambio de estas ideas de progreso y se parecían más a sus antecesores de los años treinta. Reactivos a la noción de moderniza-

ción, los animaba un ansia de restauración, sustentada, tal como explica Halperin Donghi, en una mirada revisionista de la historia nacional: la obsesión era recuperar la comunidad de destino entre pueblo y ejército; entre empresariado, clases medias y movimiento obrero; entre la gran metrópoli y las provincias, comunidad anterior a las divisiones que el liberalismo y la integración al mundo habrían introducido en su seno.

La reedición del revisionismo histórico

Los nuevos nacionalistas de los sesenta, mayoritariamente de izquierda, como Hernández Arregui, Rodolfo Puiggrós y Jorge Abelardo Ramos, heredaron de los derechistas que en los años treinta fundaron el revisionismo (Ernesto Palacio, Julio Irazusta) su actitud antiintelectual y antiuniversitaria: la intelectualidad argentina, por ser liberal, habría estado divorciada de "lo nacional" y habría promovido la escisión entre el pueblo y las elites desde las instituciones educativas. De esta "traición de la *intelligentsia*", que rastreaban ya en los orígenes de la nación (la habrían iniciado los rivadavianos y la generación del 37), surgió el imperativo de impugnar toda la producción académica (algo que despertó el entusiasmo del estudiantado, deseoso de rebelarse contra sus docentes) y oponerle una interpretación "alternativa" de los problemas y la historia nacionales inoculada contra los vicios del liberalismo, a saber, el elitismo y el universalismo (a los que se atribuían las objeciones hechas a líderes populares como Perón, Yrigoyen y Rosas). Fue en estos términos que se produjo el "encuentro" entre viejos y nuevos nacionalismos. Jauretche celebró la reinterpretación que Ernesto Sabato, desde la izquierda, realizara del peronismo, en una carta que tendría amplia difusión: "El ochenta% de los argentinos, y Ud. entre ellos, coincidimos en lo fundamental: la liberación nacional, la justicia social y la soberanía del pueblo [...] pero entretanto, una mano extranjera organiza el cipayaje y los vendepatrias". Y, en *Los profetas del odio* (1957), sostuvo: "Hay dos Argentinas paralelas: una, la de la realidad, que se elabora al margen de los estratos formales, y otra, la de las formas, que intenta condicionarla y contenerla en su natural expansión: la *intelligentzia* pertenece a ésta". Abelardo Ramos, en *Revolución y contrarrevolución* (1957), denunciaba que "la completa subordinación argentina al imperialismo, sobre todo a partir del 1900, engendró una ideología [...] una intelectualidad traductora; la aparición de 'medievalistas' como José Luis Romero en un país que vivió entre lanzas emplumadas hasta el siglo XX; la proliferación de la literatura fantástica del

género de Borges, otro prófugo de nuestra realidad [...] la ignorancia o el menosprecio de todo lo criollo [...] la glorificación de la Democracia sin contenido y el desconocimiento del problema imperialista". En su libro más influyente, *La formación de la conciencia nacional* (1960), Hernández Arregui afirma: "Ésta es la crítica –inspirada en un profundo amor al país y fe en el destino racional de la humanidad– contra la izquierda argentina sin conciencia nacional y el nacionalismo de derecha, con conciencia nacional y sin amor al pueblo [...] este libro está destinado a la juventud argentina que hoy, desorientada, busca un lugar en la lucha por la liberación [...] Los jóvenes ejecutan las revoluciones que los viejos han preparado". ■

Esta avanzada del nacionalismo de izquierda se alimentó del giro del peronismo en esa dirección y también del clima generado por los "movimientos de liberación" por entonces en auge en todo el Tercer Mundo. Entre ellos, el nasserismo, confluencia de militares y sectores populares egipcios contra la dominación imperial, fue uno de los modelos más atractivos dadas sus ostensibles similitudes con el régimen de Perón, aunque, por eso mismo, también se lo podía considerar favorable a un "militarismo populista" nada fácil de compaginar con las expectativas revolucionarias locales. Estas y otras controversias convirtieron al campo nacionalista en terreno de disputa entre proyectos muy distintos y, debido a ello, hubo muchos nacionalismos pero no un movimiento nacionalista. Cuanta más atención concitaba el "ser nacional", más difícil se hacía saber en qué consistía y más intenso era el debate al respecto. No obstante, mientras tuvo contra qué o contra quiénes unificarse, la pluralidad de idearios nacionalistas sabría mostrarse coherente.

La disputa dentro de ese campo nacionalista alcanzó a todos los actores e instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas. En ellas estaba ganando espacio un anticomunismo virulento y convencido de que el choque entre los dos bloques mundiales tendría como epicentro a países como la Argentina. La escalada insurgente y represiva en Indochina y el norte de África desde mediados de la década pareció confirmar esta hipótesis. Y la preparación en contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, administrada por militares de Estados Unidos en Panamá, pareció más oportuna que nunca. En el caso argentino, el entrenamiento militar fue acompañado del esfuerzo por "recristianizar" a las Fuerzas, librándolas de todo "resabio de laicismo liberal". En este aspecto los nacionalistas coincidían, sin querer, con los revolucionarios de todo pelaje: según unos y otros, al promover el individualismo y la neutralidad valorativa

con la excusa de asegurar el "estado de derecho", los liberales vaciaban de contenido el orden común y tornaban impotentes a las naciones y los pueblos. De allí que, para cada vez más uniformados, sólo un Occidente cristiano que defendiera valores indiscutibles contra el "nihilismo socialista" podría imponerse en la lucha que se avecinaba. Sin embargo, en franjas minoritarias aunque no irrelevantes de la oficialidad joven fue hallando también adeptos la versión popular del nacionalismo –la nasserista–, que invitaba a revalorizar la experiencia peronista y propugnaba la ruptura con el imperialismo y los "intereses oligárquicos" que hasta entonces habían dominado tanto la vida política como la militar.



La doctrina de la Seguridad Nacional

Fue expuesta con claridad por el general Juan C. Onganía en un discurso pronunciado en West Point en agosto de 1964, durante la Conferencia de los Ejércitos Americanos. En sus términos, se trataba de hacer pedagogía. Así, sostuvo que "estamos alineados en la causa común de América: defender nuestro sistema de vida occidental y cristiano contra los embates del totalitarismo rojo" (*La Razón*, 22 de septiembre de 1965). Otro oficial que sentó doctrina al respecto fue Osiris Guillermo Villegas, quien en *Políticas y estrategias para el desarrollo y la Seguridad Nacional* (1969) afirmó que "el mundo actual exige una especial coordinación entre el Desarrollo y la Seguridad" y explicó que cualquier interés contrapuesto al "nacional", por definición único y permanente, debía considerarse "antinacional". ■

Una lucha ideológica similar, por el control de otra institución tenida hasta entonces por sólido y disciplinado baluarte del orden, se venía dando ya, y de modo mucho más abierto, en la iglesia católica. También en este caso intervinieron factores externos y peculiaridades locales. Desde 1962, año del Concilio Vaticano II en Roma (seguido poco después por uno equivalente de la iglesia latinoamericana en Medellín), habían comenzado a soplar vientos de cambio en la curia: se cuestionaba la tradición conservadora y se invitaba a incorporar o enfatizar el compromiso social. Esto resultaba muy atractivo para una iglesia como la argentina, que en los años previos se había involucrado en los asuntos políticos del país y había incrementado su influencia a medida que el estado entraba en crisis. La iglesia gravitaba crecientemente en la educación y también en la asistencia social a través de organizaciones

voluntarias que se volvieron masivas en aquellos años (la Acción Católica, las juventudes católicas, etc.). Su jerarquía y su activismo habían ganado protagonismo por haber sido decisivas en la caída de Perón. Aunque no tuvo el éxito esperado en promover un partido propio, la Democracia Cristiana, sí triunfó en su intento de “recristianizar” a la dirigencia de los otros partidos, por ejemplo la de ambos radicalismos. En medio de la crisis de legitimidad que azotaba al sistema político, los partidos y los gobiernos tomaron la costumbre de apelar a la iglesia para ganar consenso. Su influencia en las Fuerzas Armadas creció aún más rápidamente, y no sólo por ser un arma contra el liberalismo: dada la confusión respecto de los intereses nacionales que debían proteger, los militares se refugiaron en la creencia, ilusoria pero por el momento eficaz, de que, si en su origen la nación se había basado en la fe cristiana, para recuperar el rumbo debía volver a ella.

Aunque la curia simpatizaba con esta idea, en su seno y en la feligresía —en mayor medida que entre los militares— faltaba un consenso sobre el significado y la orientación de esa recristianización. Y por lo tanto, a medida que su influencia crecía, la iglesia fue perdiendo unidad. Si bien después de 1955 aún parecía actuar como poder moderador, paso a paso se fue intensificando una lucha interna que dificultó el cumplimiento de ese rol: la iglesia se tornó un campo de batalla entre los ortodoxos, que se sentían cada vez más amenazados por cualquier intento de reforma y por lo tanto se hacían más y más conservadores, y los reformistas, que ante los obstáculos que aquéllos imponían a los cambios promovidos por el Concilio Vaticano II y Medellín o a los que ellos querían validar a su sombra, fueron politizándose y radicalizándose; es decir, subsumiendo los conflictos internos en el marco más amplio de los que azotaban al país. En este contexto, los jóvenes católicos confluyeron con su pares de izquierda marxista y peronista, y sintonizaron cristianismo con revolución.

Cristianismo y Revolución

Los sectores más radicalizados del clero se agruparon en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), que adquirió visibilidad cuando se solidarizó con los planes de lucha de la CGT en 1964 y 1965. A partir de 1966 un sector del MSTM lanzó la revista *Cristianismo y Revolución*, que de inmediato se convirtió en el órgano de difusión de un amplio espectro de la militancia cristiana y peronista. Uno de sus principales

orientadores fue el padre Carlos Mugica, y en su redacción participaron varios de los futuros fundadores de la organización Montoneros. El MSTM combinó la doctrina que sostenía que la redención social era el remedio para los males del hombre moderno con las teorías marxistas que daban una explicación histórica y científica de la inevitable decadencia y desaparición de la sociedad de clases. Ambas corrientes coincidían en proponer la acción política y el sacrificio personal como vías para acelerar esos cambios. Y compartían por sobre todo el desprecio hacia las formas liberales y las instituciones “burguesas”: ni la política de partidos ni las elecciones servían para hacer realidad los auténticos intereses del pueblo. Las dos coincidieron además con el populismo nacionalista en la afirmación de que el pueblo argentino tenía potencialidades dormidas y que la misión de los militantes y creyentes era despertarlas para construir un nuevo orden (llámese comunidad cristiana, reino de la justicia social o socialismo). Además, sus militantes convergieron en el mismo espacio urbano —los nuevos asentamientos ignorados por las estructuras gremiales y partidarias— y político —el “peronismo de base”, donde anidaba la voluntad popular más genuina—. El acercamiento al peronismo se vio facilitado, a su vez, por la reconciliación entre el Vaticano y Perón, consagrada en 1963 cuando a éste se le levantó la excomunión impuesta en 1955 (lo que, cabe aclarar, obedeció a una búsqueda de colaboración con fines muy distintos a los revolucionarios). ▀

Los conservadores no se quedaron atrás en el proceso de politización: las jerarquías y sus aliados militares y civiles asumieron que esta amenaza “interna” a la comunidad cristiana era letal para el orden social, pues corroía a la institución que era su fundamental defensora. Como ha explicado Loris Zanatta, esta lucha se produjo dentro del “mito de la nación católica” y en alguna medida le dio aún más crédito, dado que ambos bandos coincidían en que la solución para el país era una “auténtica sociedad cristiana” y sólo diferían en cuanto a si esa sociedad debía ser el reino de la justicia social en la tierra o el del restablecimiento de las jerarquías amenazadas por un igualitarismo desbordado.

La militancia juvenil católica, como vemos, desempeñó un papel fundamental en el fenómeno más relevante de esta etapa en el campo de las ideas: la confluencia entre la izquierda revolucionaria y el peronismo. Ella facilitó, entre otras cosas, que estos dos actores se brindaran mutuos y valiosos servicios de legitimación. Como ha explicado Vicente Palermo, “la reinención del peronismo les debe mucho a intelectuales en su mayoría provenientes de una izquierda a la deriva en busca de

sus objetos de deseo: la clase trabajadora y la nación antiimperialista". Las "izquierdas nacionalizadas" empezaron a ver en el peronismo, en vez de la versión "aberrante" de la activación de las masas que habían postulado la sociología de Germani y la izquierda de los años cincuenta, una variante exitosa de coalición entre los distintos componentes del pueblo, en la clave de las teorías de la dependencia y de los frentes nacional-populares en boga. E hicieron algo más: dieron una justificación "científica" al ejercicio intenso y regular de la violencia, consagrada como "partera de la historia" —algo que le había faltado a la Resistencia—, y racionalizaron el desprecio hacia otros recursos políticos. La Resistencia fue reinterpretada, bajo la lente del marxismo leninista, el maoísmo y el guevarismo, como prehistoria de una guerra revolucionaria que debía ingresar en su etapa decisiva: sobre el suelo fértil de los sabotajes, las huelgas prolongadas y políticas y los "caños" simbólicos, los revolucionarios se lanzaron a difundir una "ética de la violencia" que permitiría profundizar las luchas y contradicciones que animaban al peronismo, pero que éste era incapaz de llevar a su conclusión. El militante revolucionario y el guerrillero serían los protagonistas heroicos de esa ética, y en última instancia, los llamados a ejercer la conducción. Siempre y cuando Perón lo permitiera.



Peronismo y revolución

Cooke, de vuelta en el país desde 1964, escribió en *Peronismo y revolución* (1966): "El peronismo es, por su composición social y sus luchas, revolucionario por esencia [...] Lo que llamamos 'burocracia peronista' es, en síntesis, una capa dirigente que opera con los mismos valores del enemigo y es incapaz, por lo tanto, de conducir a las bases a la toma del poder, sin lo cual no hay salida ni para las clases trabajadoras ni para el país, pues ya hemos entrado en una etapa en que [...] revolución social y liberación nacional no son objetivos diferenciables sino dos aspectos de un mismo proceso indivisible". Aunque Cooke no era ya un colaborador cercano de Perón y falleció ese mismo año, su prédica tuvo más eco que antes. En *La formación de la conciencia nacional*, Hernández Arregui apostaría, en esos años y en esta misma clave, por "un reencuentro entre el ejército y el proletariado". Sin embargo, tras el golpe de 1966 se vería obligado a corregir su planteo y, ya en 1970, sostendría que, al haber optado el ejército por el colonialismo, la revolución dependería del "crecimiento de formas clandestinas de lucha".

La revisión de las posiciones "antipopulares" de la izquierda de los años cuarenta y cincuenta y de su negativa a acompañar al peronismo por "prejuicios liberales y clasistas" se correspondió con el llamado a integrarse al "campo del pueblo". Esto resultó sumamente seductor para una generación de estudiantes y profesionales que atribuía en alguna medida el fracaso de las apuestas políticas de sus padres y sus maestros a lo sofisticado de sus argumentos y análisis, y sólo deseaba quedarse con aquellos que "servían para actuar". Reconciliándose con las masas esperaban, además, obtener la autoridad moral necesaria para seguir criticando a Perón por no haber hecho la revolución prometida, por sus "errores de conducción" y por haber usurpado las luchas populares para su endiosamiento personal. Con lo que reeditaban, tal vez sin advertirlo, muchas de las críticas que la izquierda e incluso el radicalismo habían hecho al peronismo en las décadas anteriores.

La derrota de Vandor y el golpe

La única posibilidad de que el peronismo se integrara al sistema político existente y refrenara su giro a la izquierda dependía de que Vandor tuviera éxito en su plan de conformar una fuerza política autónoma respecto de Perón y capaz de ganar elecciones locales y provinciales con candidatos tolerables para los militares. Pero, para crear esta versión laborista y anticomunista del peronismo, Vandor debía mantener alineados a los sindicatos. Y para eso necesitaba confrontar con el gobierno. A su vez, éste necesitaba poner coto a las presiones sindicales y debilitar a Vandor para fortalecer su control de la situación. De allí que fuera tan difícil un pacto de no agresión entre ambos. Quien más perdía en este juego era Illia, pero él no lo entendió así. Con el fracaso del Operativo Retorno, el declive de Perón volvió a parecer inevitable, y Vandor a aparecer como el destinado a beneficiarse. Probablemente los radicales pensaron de este modo y subestimaron la capacidad de Perón de contraatacar, e incluso de insistir con su vuelta al país (tenía 69 años, y los rumores sobre su delicado estado de salud eran cada día más creíbles). Por eso vieron en el jefe sindical el enemigo prioritario a combatir.

A partir de marzo de 1965 se realizarían elecciones de diputados y gobernadores en todo el país. La Justicia habilitó a los neoperonistas para participar en los comicios, pero no al Partido Justicialista ni a los candidatos que declararan lealtad a Perón. El principal beneficiario de esta fórmula sería, una vez más, la Unión Popular de Vandor, que obtuvo

buenos resultados en Córdoba, en Buenos Aires y en las provincias del norte (reunió en total el 31% de los votos contra el 30% del gobierno, y su bancada ascendió a 52 miembros). Atemorizado ante este avance vandorista, Illia decidió manipular el filtro de las “proscripciones residuales” y permitió que en abril participara en Mendoza una lista del PJ leal a Perón. E incluso que su esposa, María Estela Martínez, viajara al país para apoyar esa lista y denostara a la UP a través de los medios oficiales. Dos días antes de la votación, Illia autorizó incluso la difusión de una grabación del propio Perón en este tono. El resultado fue que el candidato de Vandor salió tercero, detrás del PJ, y su proyecto político se derrumbó.



Destitución de Arturo Illia tras el golpe de estado encabezado por el general Juan Carlos Onganía, jefe de las Fuerzas Armadas. Momento en el que Illia abandona la Casa de Gobierno. Archivo General de la Nación.

Pero el efecto no previsto por los radicales fue que ese resultado convenció a los militares de que la única salida era una revolución que aplicara el programa del desarrollismo, en la versión autoritaria que había ido madurando. Para colmo, el gobierno siguió fortaleciendo inadvertidamente ese consenso militar, no sólo con sus así llamados “pasos de tortuga”, sino con su insistencia por orientar esos pasos contra el

gremialismo. Creyendo que el traspie de Vandor le proporcionaba las esperadas condiciones para hacerlo, dictó decretos que promovían la democracia y el pluralismo sindical. Ante esto Vandor, y con mayor contundencia José Alonso de las “62 de pie”, respondieron apostando por el golpe militar: dado que no podían esperar ya mucho de la arena electoral, consideraron que era mejor clausurarla y renovar el acuerdo entre los “factores de poder”. Los sindicalistas coincidieron así con el diagnóstico de los militares: los partidos eran innecesarios e incluso inconvenientes y había quedado demostrada la superioridad de la representación directa de los intereses sectoriales, que sería fácil subordinar a un “gobierno técnico” si éste contaba con un jefe capaz de concentrar el poder, que residía en las Fuerzas Armadas, el único actor institucional que podía “defender los intereses nacionales permanentes”.

Durante el otoño de 1966 ya era un secreto a voces que se planeaba un golpe. La prensa discutía abiertamente quiénes serían los nuevos funcionarios de gobierno y qué planes pondrían en marcha. Los partidos fijaban posición al respecto; en algunos casos, como el de Frondizi, con entusiasta disposición a buscar coincidencias con las futuras autoridades. Finalmente, el 28 de junio el presidente Illia fue “expulsado” de la Casa Rosada, tras su negativa a renunciar. Y el general Onganía fue inmediatamente designado en su reemplazo por la autoridad revolucionaria, la Junta de Comandantes.